



21 MAR 2023

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

Acta de Clasificación de Información Reservada
Número AAE/DSE-024-2023

C.P. Martín Alberto Ibarra Gallardo, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 11 fracciones IV, V, XV, XXII y XXIII del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 4, 100, 103, 104, 105, 106 fracción I, 108, 109 y 113 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción XXII, 4 segundo párrafo, 96 fracción III, inciso b), 97, 99, 100, 101, 102, 103 fracción I, 104 y 106 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Lineamientos Cuarto, Quinto, Séptimo fracción I y último párrafo, Octavo párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo Cuarto, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y

CONSIDERANDO

Primero: Que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Segundo: Que en los artículos 3 fracción XXII, 4, 96 fracción III, inciso b), 97, 99, 100, 101, 102, 103 fracción I, 104 y 106 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora se establece que:

Artículo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

XXII.- Información Reservada: La información pública que por razones de interés público sea excepcionalmente restringido el acceso de manera temporal, de conformidad con el capítulo séptimo de esta Ley;

...

Artículo 4.- El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como

reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por la Ley General y esta Ley.

Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:

...
III.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:

...
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

...

Artículo 97.- En todo caso, los supuestos de reserva previstos en el Artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los Artículos 103, 104 y 105 del Título Sexto de la Ley General.

Artículo 99.- La información pública solamente podrá reservarse con base en las causales de reserva previstas en la Ley General.

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno (sic) de las causales de reserva.

Los sujetos obligados clasificarán información pública como reservada a través de la aplicación de la prueba de daño en los términos que al efecto disponen la Ley General y esta Ley. La información reservada se sujetará al principio de excepcionalidad. El procedimiento para su determinación se llevará a cabo caso por caso.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley.

Artículo 100.- El acta de clasificación de la información como reservada, que emita el titular del área correspondiente del sujeto obligado, deberá indicar:

- I.- La fuente y el archivo donde se encuentra la información;
- II.- La fundamentación y motivación que dieron origen a la clasificación;
- III.- La parte o las partes del documento que se reserva, o si este se reserva en su totalidad;
- IV.- La fecha en que se clasifica el documento y el plazo de reserva;
- V.- El área responsable de su custodia; VI.- La firma digital o autógrafa de quien clasifica; y
- VII.- La justificación de la prueba del daño.

Artículo 101.- En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

I.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;

II.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y



III.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 102.- La clasificación de la información deberá estar debidamente fundada y motivada y deberá demostrar la existencia de elementos objetivos a partir de los cuales se infiera que con el acceso a la información existe probabilidad de dañar el interés público.

Artículo 103.-La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

I.- Se reciba una solicitud de acceso a la información;

...

Artículo 104.- Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en las disposiciones aplicables como información clasificada.

En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información

Artículo 106.- La información reservada dejará de tener dicho carácter y será de acceso público cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

I.- Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

...

Tercero: Que el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que:

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

VI. *Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;*

VII. *Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*

VIII. *La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

IX. *Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*

X. *Afecte los derechos del debido proceso;*

XI. *Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;*

XII. *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y*

XIII. *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.*

Cuarto: Que la fracción VI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación "*Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones*". En este sentido cabe advertir que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización por disposición expresa de los artículos 67 incisos A) al H) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 1, 3, 6 y 17 y demás relativos y aplicables de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, ejerce sus atribuciones y facultades de Ente Fiscalizador verificando que los Entes Públicos que reciban, administran, apliquen o ejerzan, bajo cualquier título, recursos públicos, observen y den cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, esto es, verificando y auditando que todos los actos celebrados por los Entes Públicos se celebren con apego a las leyes aplicables. Bajo esta vertiente este Órgano Superior de Fiscalización cumple con el proceso de fiscalización contemplado en la Ley de la materia, determinando, en su caso, el incumplimiento de las disposiciones legales en que hayan incurrido los sujetos de fiscalización, dando seguimiento a las observaciones determinadas y, en el supuesto de que éstos no solventen tales observaciones, emitiendo los pliegos de presuntas responsabilidades derivados de la fiscalización practicada, investigando las presuntas faltas administrativas determinadas y promoviendo, de resultar procedente, ante las autoridades competentes, el fincamiento de las responsabilidades por las irregularidades o presuntas conductas ilícitas detectadas.

Quinto: Que el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora establece que los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por un plazo de cinco años.



Sexto: Que el 08 de marzo de 2023 la Unidad de Transparencia, adscrita a este Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a través de Memorándum No. **ISAF/UT-0025-2023**, remitió a esta Unidad Administrativa a mi cargo la solicitud de acceso a la información con número de folio número **260495123000023**, la cual ingresó a través del Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 06 de marzo de 2023, por quien dijo llamarse Roberto Celaya Figueroa, en la que se solicitó textualmente lo siguiente:

"Con relación a la Auditoría Financiera Número 2020AE0102010444, realizada al Instituto Tecnológico de Sonora, dentro de la Auditoría a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2020, de la Observación 10, Parcialmente Solventada, solicito los 23 (veintitrés) contratos de mutuo interés o préstamo que ahí se mencionan. Sobre esto que se está solicitando quiero ser muy claro que la misma de inicio es información que obligatoriamente debe ser pública ya que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su Art. 70, menciona como información pública OBLIGATORIA "XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos", de igual forma se expresa la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora ya que en su Art. 81 señala, en el mismo tenor, como información pública OBLIGATORIA "XXII.- Los convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, así como copia digitalizada del convenio para su descarga"; por otra parte, y aunque esta información se hubiere incorporado esta Auditoría e incluso esté en algún proceso de responsabilidad, ello no le quita su carácter público pues el Artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que "Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa, en ese sentido el vigésimo octavo de los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información" señala como condición "II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad". Sobre esto quiero extender y señalar que el punto Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la Elaboración de Versiones Públicas, es reiterativo en lo anterior pues señala que "De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: II.- Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento", lo cual, para el caso que nos ocupa, no se actualiza ya que lo solicitado se refiere a información que por su naturaleza y características de inicio es pública por lo que incluirlas en cualquier proceso de responsabilidades no le quita esa cualificación, de igual forma claramente el último punto señalado indica, no que cualquier documento que esté en un proceso de responsabilidad no puede ser entregado, sino

solo aquellos que se refiera[n] a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad, es decir, que hubiesen sido generados como parte del mismo proceso, no incluidos solamente en él, menos si de inicio la naturaleza y características de la información es por cualificación pública. Así que reitero fundada y razonadamente mi solicitud: Con relación a la Auditoría Financiera Número 2020AE0102010444, realizada al Instituto Tecnológico de Sonora, dentro de la Auditoría a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2020, de la Observación 10, Parcialmente Solventada, solicito los 23 (veintitrés) contratos de mutuo interés o préstamo que ahí se menciona”.

Séptimo: Que la solicitud de información interpuesta se refiere a la Observación número 10 derivada de la auditoría financiera número **2020AE0102010444**, relativa al ejercicio fiscal de **2020**, misma que fue notificada al Sujeto de Fiscalización denominado **Instituto Tecnológico de Sonora**, por medio del Informe Individual de dicha auditoría correspondiente a la Fiscalización de la **Cuenta Pública del ejercicio 2020**, otorgándole a éste un plazo de 30 días hábiles para la solventación del Pliego de Observaciones del mencionado Informe Individual. No obstante lo anterior, dentro del referido plazo el Sujeto de Fiscalización proporcionó a este Instituto diversa documentación e información que se tomó como soporte para determinar que éste no había cumplido con todas las acciones contenidas en la medida de solventación determinada por este Órgano Superior de Fiscalización, por lo que una vez que concluyó el término de 30 días hábiles otorgados al Ente Fiscalizado, sin que éste proporcionara información y documentación adicional, se consideró a la Observación número **10**, Parcialmente Solventada, ello en virtud de que habían quedado asuntos pendientes de atender por parte del Sujeto de Fiscalización, es decir, quedó pendiente que el Ente Fiscalizado, **Instituto Tecnológico de Sonora**, proporcionara a este Instituto la información y documentación siguiente:

“Al respecto, cabe señalar que el Oficio No. C.I.-OF/247/2021 de fecha 16 de julio de 2021 suscrito por la Coordinadora de Contraloría Interna del ITSON, por medio del cual se informa que se dio inicio a la Investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa dentro del Expediente No. C.I.-RE/006/2021, correspondiente al Acuerdo de Investigación de fecha 16 de Julio de 2021 suscrito por la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Instituto Tecnológico de Sonora, será turnado a la Unidad de Investigación del ISAF para el seguimiento respectivo hasta que se proporcione a este Órgano Superior de Fiscalización la evidencia documental de la conclusión del procedimiento de Investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa en contra de los servidores públicos que resulten responsables”.

En este orden de ideas, al haberse agotado el plazo y procedimiento establecidos en el artículo 50, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, se notificó al Ente Fiscalizado el Informe de Solventación correspondiente al resultado del seguimiento del Pliego de Observaciones del Informe Individual de la Auditoría Financiera No. **2020AE0102010444**, relativa al Ejercicio Fiscal **2020**, a través del cual se señaló que la **Observación No. 10** fue parcialmente solventada, en virtud de lo cual este Órgano Superior de Fiscalización procedió a emitir el Pliego de Presuntas Responsabilidades Administrativas (PPRAS) por la falta de solventación de la Observación número **10** derivada del proceso de fiscalización superior, mismo que fue remitido a la Unidad de Investigación adscrita a este Instituto, a efecto de que ésta iniciara el procedimiento de investigación respectivo para

determinar si se configuran presuntas faltas administrativas que pueden calificarse como graves o no graves, que en el caso de tratarse de las primeras pudieran configurar presuntas responsabilidades administrativas o incluso penales, en estricto apego a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, con lo que se puede dar paso a la emisión y posterior envío, a la autoridad sustanciadora de este Instituto, del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), dando con ello inicio a un Procedimiento de determinación de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, incluso podrá remitir las denuncias penales que resulten procedentes ante la autoridad competente. En el caso de tratarse de faltas no graves, la Unidad de Investigación procederá a dar vista al Órgano de Control Interno competente.

Octavo: Que derivado de la relatoría realizada en el punto inmediato anterior, resulta pertinente considerar que la información requerida por el solicitante de información, a través del folio número **260495123000023**, debe clasificarse excepcionalmente como reservada de manera temporal por razones de interés público, toda vez que se perfecciona el supuesto establecido en la fracción VI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que dichos documentos e información contenida en el expediente de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**, relativa al Ejercicio Fiscal **2020**, se encuentra en procedimiento de investigación de hechos presumiblemente constitutivos de faltas administrativas o, incluso de hechos posiblemente constitutivos de delitos del orden penal, por lo que su entrega puede obstruir o impedir el ejercicio de las facultades a cargo de este Órgano Superior de Fiscalización, a través de sus áreas competentes, conferidas tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora como en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, para verificar, inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas, vulnerando el interés público que persiguen tanto las disposiciones legales de fiscalización como las de responsabilidades de los servidores públicos. En este supuesto la reserva viene a constituir una acción de protección de bienes jurídicos de mayor jerarquía que el derecho de acceso a la información, como lo son aquellos intereses públicos que ya son tutelados por ordenamientos legales específicos de donde se origina su naturaleza de reservada, como lo es en este caso una correcta y efectiva rendición de cuentas a la sociedad, así como la posible determinación de faltas administrativas que, de comprobarse su gravedad, pueden derivar en el inicio de procedimientos administrativos de responsabilidades de los servidores públicos responsables de su comisión, por lo que se considera que no es pertinente en este momento divulgar esta información y documentación sujeta a un procedimiento de investigación de presuntas responsabilidades administrativas, toda vez que puede afectar el curso, desarrollo y conclusión de la mencionada investigación de las presuntas faltas administrativas relativas a la Observación número **10** de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**.

Noveno: Que el Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, dispone que:

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:

- I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
- II. Que el procedimiento se encuentre en trámite;
- III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y
- IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

En el contexto de lo señalado en este Lineamiento, y vinculado a la fracción VI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede considerarse como reservada la información cuando se actualicen los siguientes elementos:

I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. - En este supuesto, como ya se expresó anteriormente, este Órgano Superior de Fiscalización vigila y salvaguarda que en el ejercicio de los recursos públicos, los Sujetos Obligados cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, así como en las disposiciones legales que están obligados a cumplir los Entes Fiscalizados, lo cual lleva a cabo este Instituto a través del desarrollo del proceso de fiscalización superior que realiza a los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, así como a los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que éstos tienen a su cargo; proceso que culminó, en el caso específico de la información y documentación solicitada, con la determinación de la Observación número **10**, objeto de la solicitud de información con folio número **260495123000023** derivada de la realización de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444** a cargo de este Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

II. Que el procedimiento se encuentre en trámite. - En este orden de ideas, como ya ha quedado de manifiesto anteriormente, la documentación e información solicitada mediante folio **260495123000023** se encuentra en trámite de investigación para determinar la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que ejecutaron la conducta a que hace referencia la Observación número **10** de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**, es decir, el procedimiento de investigación para configurar presuntas faltas administrativas o incluso la presunta comisión de delitos se encuentra en trámite en este Órgano Superior de Fiscalización.

III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. - En este supuesto el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece que: "Los poderes del Estado, los ayuntamientos y demás entidades públicas, independientemente de su naturaleza, son sujetos de fiscalización y estarán obligados, en los términos de esta Constitución y la ley, a rendir cuentas del ejercicio presupuestal que les corresponda. El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un organismo público autónomo, encargado de la revisión y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, en los términos establecidos en esta Constitución y la ley de la materia, también implementará acciones de prevención en materia de corrupción. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad".

De igual forma, como ya quedó mencionado en el punto I inmediato anterior, este Órgano Superior de Fiscalización vigila y salvaguarda que en el ejercicio de los recursos públicos,

los Sujetos Obligados cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, así como en las disposiciones legales aplicables, por lo que existe una vinculación directa de las actividades que realiza este Órgano Superior de Fiscalización en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, a través de la función de fiscalización que ejerce de conformidad con las disposiciones legales que forman su marco normativo.

IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.- En este sentido, como ya quedó mencionado en líneas arriba, este Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización considera que al difundir la información solicitada mediante el folio **260495123000023** impediría, obstaculizaría y podría en riesgo el ejercicio de las facultades a cargo de este Órgano Superior de Fiscalización, establecidas tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y en las diversas disposiciones legales que conforman el marco legal que regulan el correcto ejercicio de los recursos públicos encomendados a los Sujetos de Fiscalización, y que se encuentran implícitas al momento de realizar el o los procedimientos de investigación de las presuntas faltas administrativas o incluso penales que pudieran llegar a configurarse del análisis de la documentación e información soporte de la Observación número **10** de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**, por no haber cumplido con lo establecido en las leyes aplicables.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DAÑO

Con fundamento en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se considera necesaria la clasificación en carácter de Reservada de la información y documentación relativa al expediente técnico de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**, relativa al ejercicio fiscal de **2020**, realizada al Sujeto de Fiscalización denominado **Instituto Tecnológico de Sonora**, en términos de lo establecido en el artículo 113 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto en el Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se aplica la Prueba de Daño para acreditar que la entrega de la información y documentación solicitadas provoca los siguientes tres aspectos concurrentes:

- I. **La divulgación de la información y documentación a que hace referencia el párrafo inmediato anterior, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público**, en virtud de que existe el riesgo de que de entregarse o difundirse la información y documentación solicitada mediante folio **260495123000023**, que se encuentra en etapa de investigación para la determinación de presuntas faltas administrativas o incluso delitos del orden penal, se pueda ocasionar el daño de perjudicar o poner en riesgo el desarrollo de la misma investigación y, en consecuencia, puede poner en riesgo

el interés general de la sociedad de sancionar faltas administrativas de los servidores públicos, así como perseguir posibles actos de corrupción, lo que generaría un riesgo inminente de que al no sancionar dichas faltas se genere impunidad debido al ejercicio indebido de recursos públicos por parte de los Sujetos de Fiscalización. Dicho riesgo es real, demostrable e identificable en virtud de que al difundirse información que está sujeta a cualquier investigación, se puede hacer un manejo de la información que genere que los servidores públicos implicados en la comisión de este tipo de faltas administrativas evadan la responsabilidad que pudiera llegar a acreditarse con la conclusión de una investigación cuya secrecía se garantice.

Lo antes señalado pone en riesgo el ejercicio de las facultades y atribuciones encomendadas a este Órgano Superior de Fiscalización tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora como en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables, ya que dichas facultades y atribuciones se le confieren a este Instituto para efecto de que verifique el cumplimiento de las leyes que rigen el ejercicio transparente de los recursos públicos que se otorgan ya sea a los entes públicos o a particulares, así como el cumplimiento irrestricto de todas y cada una de las disposiciones legales que rigen el actuar de éstos.

Es por ello que según la fracción VI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes...por lo que vinculándola con lo establecido en el Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se considera que es procedente la reserva de la información y documentación solicitada mediante folio **260495123000023**, toda vez que se actualizan los cuatro elementos señalados en el mencionado Lineamiento, tal y como se establece a continuación:

1.- La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.- En este supuesto este Órgano Superior de Fiscalización vigila y salvaguarda que en el ejercicio de los recursos públicos, los Sujetos Obligados cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, así como en las disposiciones legales que están obligados a cumplir los Entes Fiscalizados, lo cual lleva a cabo este Instituto a través del desarrollo del proceso de fiscalización superior que realiza a los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, así como a los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que éstos tienen a su cargo; proceso que, como ya se mencionó, culminó con la determinación de la Observación número **10**, objeto de la solicitud de información con folio número **260495123000023** derivada de la realización de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444** a cargo de este Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

2.- Que el procedimiento se encuentre en trámite.- En este orden de ideas, como ya ha quedado de manifiesto anteriormente, la documentación e información solicitada mediante

folio **260495123000023** se encuentra en trámite de investigación para determinar la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos que ejecutaron la conducta a que hace referencia la Observación número **10** de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**, es decir, el procedimiento de investigación para configurar presuntas faltas administrativas o incluso la presunta comisión de delitos se encuentra en trámite en este Órgano Superior de Fiscalización.

3.- La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. – En este supuesto el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece que: “Los poderes del Estado, los ayuntamientos y demás entidades públicas, independientemente de su naturaleza, son sujetos de fiscalización y estarán obligados, en los términos de esta Constitución y la ley, a rendir cuentas del ejercicio presupuestal que les corresponda. El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un organismo público autónomo, encargado de la revisión y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, en los términos establecidos en esta Constitución y la ley de la materia, también implementará acciones de prevención en materia de corrupción. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad”.

De igual forma, como ya quedó mencionado anteriormente, este Órgano Superior de Fiscalización vigila y salvaguarda que en el ejercicio de los recursos públicos, los Sujetos Obligados cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, así como en las disposiciones legales aplicables, por lo que existe una vinculación directa de las actividades que realiza este Órgano Superior de Fiscalización en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

4.- Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.– En este sentido, como ya quedó mencionado en líneas arriba, este Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización considera que la difusión de la información solicitada mediante el folio **260495123000023** impediría, obstaculizaría y podría en riesgo el ejercicio de las facultades a cargo de este Órgano Superior de Fiscalización, establecidas tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y en las diversas disposiciones legales que conforman el marco legal que regulan el correcto ejercicio de los recursos públicos encomendados a los Sujetos de Fiscalización, y que se encuentran implícitas al momento de realizar el o los procedimientos de investigación de las presuntas faltas administrativas o incluso penales que pudieran llegar a configurarse del análisis de la documentación e información soporte de la Observación número **10** de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**, por no haber cumplido con lo establecido en las leyes aplicables.

- II. **El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda**, en virtud de que es injustificable que el interés personal del solicitante de la información, que se reserva a través de este Acuerdo, pueda superar el interés público general que consiste en garantizar a la sociedad en general que se realicen investigaciones eficientes y eficaces de presuntas faltas administrativas de servidores públicos, que en la mayoría de los casos atentan

contra el ejercicio transparente de los recursos públicos, y que de determinarse la comisión de faltas administrativas graves, éstas sean sancionadas por la autoridad competente para garantizar la no impunidad, así como la aplicación de las disposiciones legales aplicables en materia de responsabilidades administrativas, ya que es bien sabido que la investigación es una etapa fundamental para allegarse de los elementos de prueba suficientes para acreditar dichas faltas administrativas y, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos de determinación de responsabilidades administrativas correspondientes. Es por ello que resulta inminente que debe sobreponerse al interés particular de un solicitante de información al interés general de la sociedad de que se investiguen, se acrediten y se sancionen las faltas administrativas, así como las conductas presumiblemente constitutivas de delitos, garantizando que las investigaciones que se realicen constituyan el acto en el que se fundarán los futuros procedimientos administrativos que se inicien para salvaguardar el cumplimiento absoluto de las leyes que regulan el accionar de los Entes Públicos en general.

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, en virtud de que por razones de interés público se ha considerado la excepción al acceso a la información que menos restringe el derecho del solicitante, ya que la reserva de la información y documentación solicitada mediante folio **260495123000023**, se ha clasificado como reservada por un periodo de dos años cuando el plazo máximo que establece la Ley es de hasta cinco años, razón por la que se considera que se ha respetado el principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio del derecho a la información que tiene todo ciudadano mexicano. En este sentido, se pretende interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información del solicitante, ya que existe proporcionalidad entre la limitante del derecho del solicitante y el tiempo que se está considerando la reserva de la información, que es el mínimo requerido para concluir con la investigación de las presuntas faltas administrativas que se pretende salvaguardar con la reserva que se acuerda mediante este instrumento.

En virtud de lo antes expuesto se acredita el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado, toda vez que el proporcionar al solicitante la información requerida mediante folio **260495123000023** se estaría vulnerando el interés tutelado en las disposiciones legales que establecen que los Entes Públicos deben ajustar su actuación a las disposiciones legales que regulan dicho supuesto, así mismo se estaría limitando el ejercicio de las facultades a cargo de este Órgano Superior de Fiscalización, contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, ya que se estaría vulnerando la atribución de investigar las presuntas faltas administrativas y las conductas presuntivamente constitutivas de delitos.

Por último, es necesario refrendar que la reserva de la información materia del presente Acuerdo generaría un daño al momento de difundirse, ya que se estaría poniendo en riesgo

el curso de la investigación de las presuntas faltas administrativas que pudieran derivar de la Observación número **10**, materia de la solicitud de información que se reserva, lo que puede generar afectación al interés público que es el que se persigue con el cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales aplicables. De la misma forma se argumenta que el daño que se puede ocasionar en el tiempo con la difusión de la información que se reserva, puede ocasionar la prescripción de la facultad de este Instituto para determinar oportunamente, a través de la investigación respectiva de los hechos, las presuntas responsabilidades administrativas que pudieran derivar de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**, específicamente de la documentación e información soporte de la Observación número **10**.

En mérito de las consideraciones expresadas en los Considerandos antes expuestos, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 11 fracciones IV, V, XV, XXII y XXIII del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 4, 100, 103, 104, 105, 106 fracción I, 108, 109 y 113 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción XXII, 4 segundo párrafo, 96 fracción III, inciso b), 97, 99, 100, 101, 102, 103 fracción I, 104 y 106 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Lineamientos Cuarto, Quinto, Séptimo fracción I y último párrafo, Octavo párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo Cuarto, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se acuerda la reserva total de la Información y documentación relativa al expediente técnico de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**, relativa al ejercicio fiscal de **2020**, realizada al Sujeto de Fiscalización denominado **Instituto Tecnológico de Sonora**, por las razones expuestas a lo largo de la presente Acta, relativa a la Observación Número **10** derivada de la auditoría realizada al Sujeto de Fiscalización denominado **Instituto Tecnológico de Sonora**.

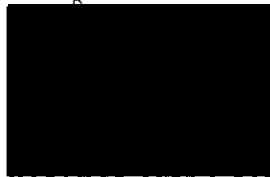
SEGUNDO: El plazo por el que se reserva la información y documentación materia de la presente Acta será de dos años, contados a partir de la fecha de la sesión del Comité de Transparencia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en la que se confirme, en su caso, la clasificación de reserva propuesta en el presente Acuerdo.

TERCERO: La fuente de la información y documentación que se reserva a través de la presente Acta proviene del Sujeto de Fiscalización denominado **Instituto Tecnológico de Sonora**, la cual fue obtenida por virtud de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444** y que obra en el expediente técnico de la mencionada auditoría, relativa al ejercicio fiscal de **2020**; encontrándose en custodia en el archivo de trámite de la Auditoría Adjunta de Fiscalización al Gobierno del Estado del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora.

CUARTO: El expediente técnico en el que obra la información y documentación materia de reserva de la presente Acta, se reserva en su totalidad, toda vez que en el mismo se encuentra toda la documentación e información soporte de la observación número **10**, determinada durante el desarrollo de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**, relativa al ejercicio fiscal de **2020** y que fue practicada al Sujeto de Fiscalización denominado **Instituto Tecnológico de Sonora**.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veintiún días del mes de marzo de 2023.

El Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado



C.P. MARTÍN ALBERTO IBARRA GALLARDO M.A.CFP.PCCAG.

A handwritten signature in black ink, located to the right of the printed name.

La presente página corresponde al *Acta de Clasificación de Información Reservada* Número **AAE/DSE-024-2023**, relativa a la información y documentación de la Observación Número **10** de la Auditoría Financiera número **2020AE0102010444**, relativa al ejercicio fiscal de **2020**, realizada al Sujeto de Fiscalización denominado **Instituto Tecnológico de Sonora**, de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés. - - - - -